

GOVERN DE LES ILLES BALEARS
OPOSICIONES AL CUERPO DE ASESORES JURÍDICOS (NIVEL A)
EXAMEN DE TIPO TEST - 110 PREGUNTAS
(4 opciones de respuesta —a, b, c, d—, solo UNA respuesta correcta)

1. La Constitución Española de 1978 consta de un preámbulo, un título preliminar y:

- a) Diez títulos numerados, cuatro disposiciones adicionales, nueve transitorias, una derogatoria y una final.
- b) Once títulos numerados, cuatro disposiciones adicionales, nueve transitorias, una derogatoria y una final.
- c) Diez títulos numerados, cinco disposiciones adicionales, ocho transitorias, una derogatoria y una final.
- d) Diez títulos numerados, cuatro disposiciones adicionales, nueve transitorias, dos derogatorias y una final.

2. Según el artículo 1.1 de la Constitución Española, los valores superiores del ordenamiento jurídico son:

- a) La libertad, la justicia, la igualdad y la solidaridad.
- b) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
- c) La libertad, la justicia, la seguridad jurídica y el pluralismo político.
- d) La libertad, la igualdad, la solidaridad y el pluralismo político.

3. La reforma constitucional por el procedimiento ordinario del artículo 167 de la Constitución Española requiere:

- a) La aprobación por mayoría de tres quintos de cada una de las cámaras.
- b) La aprobación por mayoría de dos tercios de cada una de las cámaras.
- c) La aprobación por mayoría absoluta de cada una de las cámaras, seguida de referéndum obligatorio.
- d) La aprobación por mayoría de tres quintos del Congreso exclusivamente, con posterior ratificación del Senado.

4. El recurso de amparo constitucional protege los derechos reconocidos en:

- a) Los artículos del 14 al 29 y el artículo 30.2 de la Constitución Española.
- b) Todos los derechos del capítulo II del título I (artículos del 14 al 38).
- c) Los artículos del 15 al 29 exclusivamente.
- d) Los artículos del 14 al 29, el artículo 30.2 y los principios rectores del capítulo III.

5. La suspensión individual de derechos fundamentales prevista en el artículo 55.2 de la Constitución Española se refiere a:

- a) La suspensión de derechos durante los estados de alarma, excepción y sitio.
- b) La suspensión de determinados derechos, mediante una ley orgánica y de forma individual, en relación con investigaciones sobre bandas armadas o elementos terroristas, con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario.
- c) La suspensión de todos los derechos del título I por acuerdo del Consejo de Ministros.
- d) La suspensión de derechos decretada por el Tribunal Constitucional en procedimientos de amparo.

6. El artículo 53.3 de la Constitución Española establece que los principios rectores de la política social y económica (capítulo III del título I):

- a) Son directamente invocables ante la jurisdicción ordinaria como derechos subjetivos plenos.
- b) Informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, y solo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen.
- c) Gozan de la misma protección que los derechos de la sección 1ª del capítulo II.
- d) Son susceptibles de recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

7. Respecto a las leyes de armonización previstas en el artículo 150.3 de la Constitución Española:

- a) Se transfieren competencias exclusivas del Estado a las comunidades autónomas.
- b) El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las comunidades autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de estas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada cámara, la apreciación de esta necesidad.
- c) Se atribuye a las comunidades autónomas la facultad de dictar normas legislativas en el marco de los principios fijados por una ley estatal.
- d) Requieren la aprobación por mayoría de dos tercios de cada cámara.

8. En el sistema de distribución competencial, las competencias compartidas se caracterizan por:

- a) La intervención de ambas instancias territoriales sobre una misma materia, correspondiendo al Estado la legislación básica y a la comunidad autónoma el desarrollo legislativo y la ejecución.
- b) La atribución exclusiva al Estado tanto de la legislación como de la ejecución.
- c) La asunción íntegra por la comunidad autónoma de todas las potestades sobre la materia.
- d) La intervención conjunta y simultánea del Estado y la comunidad autónoma en el ejercicio de la potestad legislativa plena.

9. El Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, en su texto vigente conforme a la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, consta de un preámbulo y:

- a) 139 artículos distribuidos en nueve títulos, con seis disposiciones adicionales, once transitorias y una final.
- b) 139 artículos distribuidos en diez títulos, con cinco disposiciones adicionales, nueve transitorias y una final.
- c) 141 artículos distribuidos en nueve títulos, con seis disposiciones adicionales, diez transitorias y dos finales.
- d) 137 artículos distribuidos en nueve títulos, con seis disposiciones adicionales, once transitorias y una final.

10. Según el artículo 152.1 primer párrafo de la Constitución Española, la organización institucional básica de los estatutos de autonomía se basará en:

- a) Asamblea Legislativa, Consejo de Gobierno y un presidente.
- b) Asamblea Legislativa y Consejo de Gobierno.
- c) Asamblea Legislativa y presidente.
- d) Presidente y Consejo de Gobierno.

11. La reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears se regula en:

- a) El título VIII del Estatuto.
- b) El título IX del Estatuto.
- c) El título VII del Estatuto.
- d) La disposición adicional sexta del Estatuto.

12. Según la Ley 4/2001, de 14 de marzo, del Gobierno de las Illes Balears, el Gobierno está compuesto por:

- a) El presidente y los consejeros exclusivamente.
- b) El presidente, el vicepresidente o los vicepresidentes, si procede, y los consejeros.
- c) El presidente, los consejeros y los secretarios generales.
- d) El presidente, los vicepresidentes, los consejeros y los directores generales.

13. Según el artículo 5.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, tienen la consideración de órganos administrativos:

- a) Todas las unidades administrativas de la Administración, con independencia de sus funciones.
- b) Las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo.
- c) Exclusivamente los órganos directivos de las consejerías.
- d) Las unidades con rango de subdirección general o superior.

14. Según el artículo 2.1 de la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, la función pública se ordena de acuerdo con los principios de:

- a) Igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
- b) Legalidad, objetividad, neutralidad, servicio a la ciudadanía, eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión.
- c) Jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación.
- d) Eficacia, eficiencia, economía y publicidad.

15. Los principios constitucionales que informan el acceso al empleo público, recogidos en el artículo 2.2 de la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, son:

- a) Igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
- b) Legalidad, objetividad, neutralidad y transparencia.
- c) Igualdad, mérito y capacidad exclusivamente.
- d) Libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

16. La Ley 7/2010, de 21 de julio, del sector público instrumental de la CAIB, en su artículo 30, clasifica los organismos públicos en:

- a) Organismos autónomos, entes públicos empresariales y consorcios.
- b) Organismos autónomos y entidades públicas empresariales.
- c) Agencias públicas, entes instrumentales y fundaciones del sector público.
- d) Organismos autónomos, entes públicos empresariales, sociedades mercantiles públicas y fundaciones.

17. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, de conformidad con el artículo 119.1, los consorcios se rigen por:

- a) Exclusivamente por sus estatutos de constitución.
- b) Lo dispuesto en la Ley 40/2015, la normativa autonómica aplicable y sus estatutos.
- c) La legislación mercantil y sus acuerdos de constitución.
- d) Las mismas normas que los organismos autónomos sin excepción.

18. El artículo 30 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears regula:

- a) Las competencias de desarrollo legislativo y ejecución.
- b) Las competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma.
- c) Las competencias ejecutivas de la Comunidad Autónoma.
- d) Las competencias compartidas con el Estado.

19. La Compilación de derecho civil de las Illes Balears fue aprobada inicialmente por:

- a) La Ley 5/1961, de 19 de abril.
- b) El Decreto Legislativo 79/1990, de 6 de septiembre, que aprueba el texto refundido.
- c) La Ley 8/1990, de 28 de junio.
- d) La Ley de bases de 11 de mayo de 1888.

20. Según el artículo 149.1.8ª de la Constitución Española, corresponde al Estado la competencia exclusiva sobre:

- a) La totalidad de la legislación civil sin excepción.
- b) La legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las comunidades autónomas de los derechos civiles forales o especiales, allí donde existan.
- c) Exclusivamente las normas relativas a la resolución de conflictos de leyes.
- d) Exclusivamente la legislación civil referida al régimen económico matrimonial en todo el territorio nacional.

21. Señala cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta:

- a) La evaluación de la calidad de las organizaciones y los servicios públicos persigue, entre otros objetivos, identificar aquellos aspectos y áreas de mejora que permitan y favorezcan la evolución y el desarrollo de las organizaciones, mediante la mejora continua.
- b) La evaluación de la calidad de las organizaciones y los servicios públicos persigue asegurar la comparación, la cooperación y la competitividad de los órganos, los organismos y las unidades que prestan servicios públicos, entre otros objetivos.
- c) La evaluación de la calidad de las organizaciones y los servicios públicos persigue medir el rendimiento de las organizaciones y los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía, especialmente en relación con la transparencia de los sueldos y el patrimonio de los altos cargos del sector público.
- d) La evaluación de la calidad de las organizaciones y los servicios públicos persigue, entre otros objetivos, mejorar la transparencia y hacer llegar a la ciudadanía, en su condición de destinataria de la actividad pública, información sobre los niveles de calidad prestados. En este sentido, se tendrá especialmente en cuenta la transmisión actualizada de información sobre la calidad de los servicios a los representantes y las organizaciones sociales en aquellos ámbitos que sean de su competencia.

22. La propiedad horizontal se regula principalmente en:

- a) Los artículos 392 y siguientes del Código Civil.

- b) La Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal.
- c) La Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994.
- d) El Código de Comercio.

23. El derecho real de anticresis, regulado en los artículos 1881 y siguientes del Código Civil:

- a) Consiste en la entrega de una cosa mueble en garantía del cumplimiento de una obligación.
- b) Faculta al acreedor a percibir los frutos de un inmueble del deudor, con la obligación de aplicarlos al pago de los intereses, si se debieren, y después al del capital de su crédito.
- c) Es un derecho real de adquisición preferente sobre bienes muebles.
- d) Atribuye al acreedor el derecho de retención sobre cualquier tipo de bien del deudor.

24. La Ley 3/1986, de 29 de abril, de Normalización Lingüística de las Illes Balears, establece que:

- a) La lengua catalana es la única lengua oficial de la Comunidad Autónoma.
- b) La lengua catalana, propia de las Illes Balears, y la castellana son las dos lenguas oficiales, y nadie puede ser discriminado por razón del idioma.
- c) La lengua castellana es preferente en los procedimientos administrativos.
- d) El catalán solo es oficial en las relaciones internas de la Administración autonómica.

25. Las decisiones de la Unión Europea como fuente del derecho derivado:

- a) Son obligatorias en todos sus elementos y directamente aplicables, pero no vinculan a todos sus destinatarios.
- b) Son obligatorias en todos sus elementos y vinculan a todos sus destinatarios.
- c) Son obligatorias en cuanto al resultado, dejando libertad de medios, como las directivas.
- d) No tienen carácter vinculante.

26. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene su sede en:

- a) Bruselas.
- b) Estrasburgo.
- c) Luxemburgo.
- d) La Haya.

27. Los fondos estructurales y de inversión de la Unión Europea (fondos EIE) incluyen, entre otros:

- a) El fondo europeo de desarrollo regional (FEDER), el fondo social europeo (FSE) y el fondo de cohesión.
- b) Exclusivamente el fondo de cohesión y el FEDER.
- c) El Fondo Monetario Internacional y el Banco Europeo de Inversiones.
- d) El Banco Central Europeo y el Mecanismo Europeo de Estabilidad.

28. Según el artículo 9.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, no pueden ser objeto de delegación de competencias, entre otras:

- a) Las competencias en materia de contratación y gestión patrimonial.
- b) Los asuntos relativos a relaciones con la Jefatura del Estado, la Presidencia del Gobierno de la Nación, las Cortes Generales, las presidencias de los consejos de gobierno de las

comunidades autónomas y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, y la adopción de disposiciones de carácter general.

- c) Las competencias en materia de gestión de personal.
- d) Las resoluciones de recursos administrativos de carácter ordinario.

29. La avocación, regulada en el artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, consiste en:

- a) La transferencia definitiva de la titularidad de una competencia de un órgano superior a otro inferior.
- b) Los órganos superiores podrán avocar para sí el conocimiento de uno o varios asuntos cuya resolución corresponda ordinariamente o por delegación a sus órganos administrativos dependientes, cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente.
- c) La encomienda de la realización de actividades materiales a otro órgano o entidad.
- d) La sustitución temporal de un titular de un órgano por otro en caso de vacante, ausencia o enfermedad.

30. Las causas de abstención de las autoridades y del personal al servicio de las administraciones públicas se regulan en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. ¿Cuál de las siguientes no es causa de abstención?

- a) Tener interés personal en el asunto.
- b) Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado con cualquiera de los interesados.
- c) Haber residido en la misma localidad que el interesado durante los últimos cinco años.
- d) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguno de los interesados.

31. El Síndic de Greuges de las Illes Balears es:

- a) El alto comisionado del Parlamento para la defensa de los derechos y libertades comprendidos en el título I de la Constitución Española, en el ámbito de la CAIB.
- b) El órgano de control externo de las cuentas públicas de la CAIB.
- c) El órgano consultivo supremo del Gobierno de las Illes Balears.
- d) El representante del Gobierno de España en las Illes Balears.

32. La Sindicatura de Cuentas de las Illes Balears tiene como función principal según el artículo 82 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears:

- a) La defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
- b) La fiscalización externa de la actividad económica, financiera y contable del sector público de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
- c) La emisión de dictámenes preceptivos sobre proyectos de ley del Gobierno.
- d) La prevención y la lucha contra la corrupción en las Illes Balears.

33. El Consejo Consultivo de las Illes Balears es:

- a) Un órgano jurisdiccional de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
- b) El superior órgano de consulta de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, que ejerce sus funciones con autonomía orgánica y funcional.
- c) Un órgano dependiente del Gobierno con funciones exclusivamente de asesoramiento político.

d) El órgano encargado de resolver los conflictos de competencia entre consejos insulares.

34. Los consejos insulares, según el Estatuto de Autonomía, ejercen potestad reglamentaria en:

- a) Las materias que les sean atribuidas como competencias propias por el Estatuto y las leyes.
- b) Todas las materias, con carácter general, al ser entes con autonomía plena e ilimitada.
- c) Solo las materias que les delegue expresamente el Gobierno de las Illes Balears.
- d) Exclusivamente las materias de organización interna de sus servicios.

35. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, tiene por objeto, según el artículo 1.1:

- a) Regular exclusivamente la igualdad retributiva en el ámbito laboral.
- b) Hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en cualesquiera de los ámbitos de la vida y, singularmente, en las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural para, en el desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de la Constitución Española, alcanzar una sociedad más democrática, más justa y más solidaria.
- c) Establecer medidas penales contra la discriminación por razón de sexo.
- d) Regular los planes de igualdad exclusivamente en las empresas de más de 250 trabajadores.

36. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, tiene como objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres:

- a) Se ejerce sobre las mujeres por quienes sean o hayan sido sus cónyuges o estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia.
- b) Se ejerce sobre cualquier persona en el ámbito doméstico o familiar, con independencia del sexo.
- c) Se produce exclusivamente en el ámbito laboral sobre las mujeres.
- d) Se ejerce sobre las mujeres exclusivamente por sus cónyuges actuales.

37. Según la Constitución Española, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a la reserva de ley orgánica?

- a) Las leyes orgánicas pueden ser aprobadas por mayoría simple del Congreso.
- b) Las leyes orgánicas requieren mayoría absoluta en el Congreso en una votación final sobre el conjunto.
- c) Las leyes orgánicas pueden ser aprobadas por las Cortes Generales o por los parlamentos autonómicos.
- d) Las leyes orgánicas solo pueden regular derechos fundamentales y libertades públicas.

38. De acuerdo con la legislación vigente, ¿qué órgano está expresamente habilitado para aprobar reglamentos ejecutivos de desarrollo de las leyes estatales?

- a) El Tribunal Constitucional.
- b) El Gobierno.

- c) El Defensor del Pueblo.
- d) El Consejo de Estado.

39. El reglamento aprobado por el Gobierno mediante un real decreto en desarrollo de una ley es un ejemplo de:

- a) Reglamento independiente.
- b) Reglamento ejecutivo.
- c) Ley autonómica.
- d) Decreto ley.

40. Según la normativa administrativa, ¿cuál de los siguientes elementos es uno de los requisitos imprescindible para la validez de un convenio?

- a) Que sea aprobado por decreto ley.
- b) Que conste por escrito y se identifiquen las partes firmantes.
- c) Que sea tramitado como una ley ordinaria.
- d) Que esté publicado en el BOE antes de su firma.

41. ¿Cuál de las siguientes es una causa de extinción de los convenios prevista en la normativa general?

- a) La inactividad temporal de una de las partes.
- b) La pérdida de vigencia por cumplimiento del objeto previsto.
- c) La falta de publicidad en un boletín oficial.
- d) El cambio de titular del órgano firmante.

42. ¿Qué característica distingue a los actos administrativos según la legislación básica?

- a) Se dictan siempre por órganos colegiados.
- b) Producen efectos jurídicos sobre terceros de forma automática.
- c) Son decisiones unilaterales de la Administración en ejercicio de potestades administrativas.
- d) Deben publicarse obligatoriamente en el BOE para ser válidos.

43. Un acto administrativo será anulable, pero no nulo de pleno derecho, cuando:

- a) Lesione derechos fundamentales.
- b) Se prescinda total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido.
- c) Sea dictado por órgano incompetente, pero no de forma manifiesta por razón de la materia o del territorio.
- d) Carezca completamente de contenido.

44. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cuál de las siguientes actuaciones forma parte de la fase de instrucción del procedimiento administrativo?

- a) El acuerdo de incoación del procedimiento.
- b) La puesta de manifiesto del expediente antes de la propuesta de resolución.
- c) La resolución definitiva.
- d) La ejecución forzosa.

45. Cuando un plazo se exprese en meses, según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- a) Se contará, en algunas ocasiones, en días hábiles.
- b) Estos se computarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo.
- c) Debe contarse en meses de treinta días.
- d) Se computarán siempre solo los días hábiles dentro del mes.

46. Según el artículo 95.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la Administración declarará la caducidad cuando:

- a) No se haya dictado resolución en el plazo legal.
- b) Se produzca su paralización por causa imputable al interesado y este no realice una actividad necesaria durante un plazo de tres meses.
- c) Se supere el plazo máximo sin notificar la resolución.
- d) El órgano competente cambie durante la tramitación.

47. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la potestad sancionadora de las administraciones públicas se ejercerá:

- a) Siempre con efectos retroactivos favorables o desfavorables.
- b) Únicamente mediante procedimientos abreviados.
- c) Con sujeción a los principios de legalidad, tipicidad, irretroactividad y proporcionalidad.
- d) Solo por autoridades con rango de director general o superior.

48. De acuerdo con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, existirá responsabilidad patrimonial de la Administración cuando el daño alegado por el interesado sea:

- a) Derivado de un caso fortuito, en todos los casos.
- b) Efectivo, evaluable económicamente e individualizado en relación con una persona o grupo de personas.
- c) Causado por fuerza mayor.
- d) Derivado de hechos que el particular tenía el deber jurídico de soportar.

49. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la interposición de un recurso administrativo produce:

- a) La suspensión automática de la ejecución del acto impugnado.
- b) La suspensión únicamente si el órgano la acuerda motivadamente.
- c) La suspensión si el interesado la solicita, sin necesidad de resolución.
- d) La suspensión automática cuando se trate de actos de trámite cualificados.

50. ¿Cuál de los siguientes actos no admite recurso de alzada y solo admite, si procede, recurso potestativo de reposición?

- a) Una resolución dictada por un director general.
- b) Una resolución dictada por un órgano con superior jerárquico.
- c) Una resolución dictada por un secretario general técnico.
- d) Una resolución dictada por un ministro.

51. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, debe inadmitirse un recurso administrativo, entre otras, por las siguientes causas:

- a) El interesado no haya presentado alegaciones durante la tramitación.
- b) El recurso se interponga contra un acto no susceptible de recurso.
- c) El recurrente no solicite expresamente la suspensión del acto.
- d) La notificación del acto recurrido haya sido defectuosa.

52. Un encargo de los poderes adjudicadores conforme al artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, requiere, entre otros aspectos previstos en el mismo artículo:

- a) Que la entidad destinataria del encargo esté obligada a concurrir en licitación pública.
- b) Que la persona jurídica que utilicen merezca la calificación jurídica de medio propio personificado respecto de ellos.
- c) Que el encargo se adjudique mediante procedimiento abierto.
- d) Que el encargo se limite exclusivamente a contratos de obras.

53. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la revisión de precios en los contratos del sector público:

- a) Es libre si se pacta en el pliego.
- b) Salvo en los contratos de suministro de energía, cuando proceda, la revisión periódica y predeterminada de precios en los contratos del sector público tendrá lugar en los términos establecidos en el capítulo II del título III de la Ley 9/2017, cuando hubiera transcurrido un año desde su formalización y se hubiera ejecutado, al menos, en el 20 % de su importe.
- c) Solo se admite en contratos de obra.
- d) Puede aplicarse desde el inicio del contrato, sin limitaciones.

54. Según el artículo 18 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, un contrato se considerará mixto cuando:

- a) Su objeto incluya prestaciones de naturaleza sucesiva.
- b) Su objeto combine elementos de obra y concesión de servicios.
- c) Contenga prestaciones correspondientes a otro u otros de distinta clase.
- d) Se ejecute de forma simultánea por varias administraciones.

55. ¿Cuál de los siguientes sí es un supuesto de resolución obligatoria del contrato según el artículo 211.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público?

- a) La modificación del contrato por mutuo acuerdo entre Administración y contratista.
- b) La demora del contratista en el cumplimiento por causa imputable a la Administración.
- c) La imposibilidad de ejecutar el contrato en los términos inicialmente pactados, aunque sea posible modificar el contrato conforme a los artículos 204 y 205 de la Ley 9/2017.
- d) La demora en el cumplimiento de los plazos por el contratista. En todos los casos, el retraso injustificado sobre el plan de trabajos establecido en el pliego o en el contrato, en cualquier actividad, por un plazo superior a un tercio del plazo de duración inicial del contrato, incluidas las posibles prórrogas.

56. Según el Código civil, la perfección del contrato de compraventa se produce:

- a) Cuando se paga el precio.
- b) Cuando se entrega la cosa vendida.
- c) Cuando las partes convienen la cosa objeto del contrato y el precio, aunque no se haya entregado ni pagado.
- d) Cuando el contrato se eleva a escritura pública.

57. Según la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, existe subvención cuando:

- a) La Administración entrega fondos a cambio de una contraprestación.
- b) Se otorga una entrega dineraria a favor de personas públicas o privadas y esta entrega cumple los requisitos legales.
- c) Se realiza una compra pública.
- d) Se adjudican contratos menores.

58. La norma básica estatal que regula las subvenciones es:

- a) La Ley 39/2015.
- b) La Ley 40/2015.
- c) La Ley 38/2003.
- d) La Ley 9/2017.

59. El impuesto del turismo sostenible de las Illes Balears es:

- a) Un impuesto estatal cedido.
- b) Un impuesto municipal.
- c) Un tributo propio de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
- d) Una tasa turística privada.

60. De acuerdo con el artículo 8.2 del Decreto Legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Subvenciones, el acto de concesión:

- a) Lleva implícita la aprobación del gasto correspondiente.
- b) Lleva implícita la aprobación y disposición del gasto correspondiente.
- c) Lleva implícita la disposición, pero no la aprobación del gasto correspondiente.
- d) No lleva implícita ninguna fase del procedimiento de gestión de gasto del presupuesto.

61. Los gastos subvencionables según la normativa en materia de subvenciones deben:

- a) Ser siempre anteriores a la convocatoria.
- b) Estar directamente relacionados con la actividad subvencionada, resultar estrictamente necesarios y realizarse en el plazo establecido por las diferentes bases reguladoras de las subvenciones.
- c) Ser imputables al beneficiario, pero no justificados.
- d) Tener un mínimo del 25 % de aportación propia.

62. Según el artículo 29.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la subcontratación superior al 50 % del importe de la actividad subvencionada:

- a) Está prohibida.
- b) Es posible si lo autorizan las bases reguladoras de la subvención.
- c) Solo es válida en subvenciones europeas.
- d) Debe realizarse mediante contrato menor.

63. En subvenciones de la Unión Europea, uno de los principales órganos competentes de control es:

- a) El Tribunal Supremo.
- b) La Comisión Europea.
- c) El Consejo Europeo.
- d) El Defensor del Pueblo.

64. El reintegro, según la Ley 38/2003, General de Subvenciones, exige:

- a) Procedimiento con audiencia del interesado.
- b) Orden verbal del órgano gestor.
- c) Aprobación del interventor.
- d) Resolución judicial.

65. La donación de bienes inmuebles según el Código civil no queda perfeccionada mientras:

- a) El donante no pague los gastos de otorgamiento de escritura.
- b) El donatario no haya expresado su aceptación en vida del donante.
- c) No se haya entregado la cosa donada.
- d) No haya transcurrido un plazo de diez días desde la aceptación.

66. Según el ordenamiento jurídico español, la actividad administrativa de servicio público se caracteriza por:

- a) Ser siempre de titularidad privada, con control administrativo.
- b) Ser una actividad prestacional dirigida a satisfacer necesidades públicas.
- c) Ser una actividad de policía cuya finalidad es limitar derechos.
- d) Requerir siempre una contraprestación económica del usuario.

67. Según la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, existe concesión de servicios cuando:

- a) El contratista presta un servicio sin riesgo económico.
- b) Uno o varios poderes adjudicadores encomiendan a título oneroso a una o varias personas, naturales o jurídicas, la gestión de un servicio cuya prestación sea de su titularidad o competencia y cuya contrapartida venga constituida bien por el derecho a explotar los servicios objeto del contrato bien por dicho derecho acompañado del de percibir un precio, e implicará la transferencia al concesionario del riesgo operacional.
- c) La Administración financia íntegramente la actividad.
- d) El contratista actúa únicamente como colaborador auxiliar del órgano gestor.

68. Según el Estatuto Básico del Empleado Público, los empleados públicos se clasifican en:

- a) Únicamente los funcionarios de carrera y los interinos.
- b) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral y personal eventual.
- c) Solo los funcionarios de carrera.
- d) Funcionarios y altos cargos.

69. La Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la Función Pública de la CAIB, establece que su objeto principal es:

- a) Regular solo el marco del personal laboral.
- b) Regular la función pública de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y la determinación del régimen jurídico del personal que la integra, en el ejercicio de las competencias atribuidas por el Estatuto de Autonomía y en el marco de la normativa básica del Estado.
- c) Regular exclusivamente la carrera profesional tanto de los funcionarios como de los laborales.
- d) Establecer el régimen disciplinario del personal estatutario sanitario.

70. Conforme a la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la Función Pública de la CAIB, constituye falta grave, entre otras:

- a) La falta de puntualidad repetida.
- b) El incumplimiento justificado de la jornada.
- c) El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo que no constituya falta muy grave.
- d) La negligencia leve en el servicio.

71. Los sistemas selectivos de funcionarios de carrera, según el Estatuto Básico del Empleado Público, serán:

- a) La oposición y el concurso-oposición, que deberán incluir, en todos los casos, una o varias pruebas para determinar la capacidad de los aspirantes y establecer el orden de prelación.
- b) Con carácter general será el concurso.
- c) La libre designación.
- d) El que se establezca en cada oferta de empleo público.

72. La cuantía del proceso civil, según lo establecido por la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, se determina según:

- a) El interés subjetivo del demandante.
- b) Las reglas de los artículos 251 y 252 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
- c) La elección del demandado.
- d) El tipo de procedimiento deseado por las partes.

73. La demarcación judicial se basa en:

- a) Municipio, comarca, provincia y comunidad autónoma.
- b) Partido judicial, provincia, municipio y comunidad autónoma.
- c) Comarca y distrito.
- d) Distrito y área metropolitana.

74. Según lo establecido en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, a efectos de prueba en el proceso, se consideran documentos públicos, entre otros:

- a) Las certificaciones que expidan los registradores de la propiedad y mercantiles de los asientos registrales.
- b) Solo las diligencias de actuaciones judiciales de toda especie.
- c) Los autorizados por notario con arreglo a derecho.
- d) Las respuestas a) y c) son correctas.

75. De acuerdo con el artículo 450 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil:

- a) Todo recurrente podrá desistir del recurso antes de que sobre él recaiga resolución.

- b) Una vez interpuesto el recurso no se puede desistir.
- c) En caso de ser varios recurrentes deberán desistir todos ellos para que el desistimiento sea efectivo.
- d) Todo recurrente podrá desistir del recurso antes de que sobre él recaiga resolución, excepto del recurso de casación una vez señalado el día para su deliberación, votación y fallo.

76. No se incluirán en la tasación de costas de todo tipo de procesos e instancias:

- a) Los honorarios de los abogados y demás profesionales.
- b) Los derechos correspondientes a escritos y actuaciones que sean inútiles, superfluas o no autorizadas por la ley, ni las partidas de las minutas que no se expresen detalladamente o que se refieran a honorarios que no se hayan devengado en el pleito.
- c) El impuesto sobre el valor añadido de los honorarios del abogado y de los derechos de procurador.
- d) Los honorarios de los procuradores.

77. Los créditos iniciales y las previsiones iniciales de los estados de gasto y de ingresos de los presupuestos generales de los entes del sector público administrativo de la Comunidad Autónoma podrán ser objeto de las siguientes modificaciones presupuestarias:

- a) Solamente ampliaciones de crédito y generaciones de crédito.
- b) Créditos extraordinarios, suplementos de crédito, ampliaciones de crédito, transferencias de crédito, generaciones de crédito, incorporaciones de crédito y rectificaciones de crédito.
- c) Las respuestas a) i b) son verdaderas.
- d) Todas las respuestas anteriores son falsas.

78. De acuerdo con lo previsto en el artículo 110, de la Ley 14/2014, de 29 de diciembre, de Finanzas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, uno de los objetivos del control interno que regula el capítulo II del título IV de la Ley es:

- a) Verificar el cumplimiento de la normativa aplicable en la gestión que sea objeto de control.
- b) Evaluar que la actividad y los procedimientos se llevan a cabo de acuerdo con el principio de buena fe.
- c) Verificar exclusivamente el cumplimiento de la normativa autonómica.
- d) Evaluar que la actividad y los procedimientos se llevan a cabo de acuerdo con el principio de confianza legítima.

79. Los bienes de dominio público mientras no sean desafectados:

- a) No pueden ser alienados ni gravados de ningún modo, son imprescriptibles e inembargables, pero pueden ser objeto de carga o gravamen.
- b) No pueden ser alienados ni gravados de ningún modo, son imprescriptibles, inembargables y, en consecuencia, no pueden ser objeto de gravamen, carga, afección, transacción o arbitraje.
- c) Son imprescriptibles e inembargables, pero pueden ser alienados y gravados.
- d) Solo pueden ser objeto de afección, transacción o arbitraje.

80. De acuerdo con el artículo 14 de la Ley 6/2001, de 11 de abril, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, la Administración de la Comunidad Autónoma puede recuperar:

- a) Por propia autoridad y en todo momento, la posesión perdida indebidamente de los bienes de dominio público de la Comunidad Autónoma.
- b) Por propia autoridad, la posesión perdida indebidamente de los bienes de dominio público de la Comunidad Autónoma, siempre que no haya transcurrido el plazo de un año a contar desde el día siguiente al de la usurpación.
- c) Solo a instancia de un particular, la posesión perdida indebidamente de los bienes de dominio público de la Comunidad Autónoma, y siempre que no haya transcurrido el plazo de un año a contar desde el día siguiente al de la usurpación.
- d) Todas las respuestas anteriores son falsas.

81. Según el artículo 21.1 de la Ley 6/2001, de 11 de abril, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, el uso común de los bienes demaniales:

- a) Solo puede ser especial.
- b) Preferiblemente debe ser general.
- c) Puede ser general y especial, según su intensidad y sus límites.
- d) Puede ser general y especial, según su intensidad y sus límites, pero preferiblemente será especial.

82. De acuerdo con el artículo 22 de la Ley 6/2001, de 11 de abril, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, el uso privativo de los bienes de dominio público:

- a) Supone su utilización individualizada, que no limita ni impide su libre uso por otras personas.
- b) Supone su utilización individualizada, pero no requiere el otorgamiento previo de un título adecuado.
- c) Supone su utilización individualizada, que limita e impide su libre uso por otras personas y requiere el otorgamiento previo de un título adecuado de acuerdo con las reglas previstas en dicho artículo.
- d) Supone su utilización individualizada, que limita e impide su libre uso por otras personas, pero no requiere el otorgamiento previo de un título adecuado.

83. La concesión de dominio público es:

- a) El título que otorga a una persona el uso y aprovechamiento privativo y permanente de un bien de dominio público, manteniendo su titularidad la Comunidad Autónoma.
- b) El título que otorga a una persona el uso y aprovechamiento privativo y permanente de un bien de dominio público, perdiendo su titularidad la Comunidad Autónoma.
- c) El título que otorga a una persona el uso y aprovechamiento privativo y temporal de un bien de dominio público, perdiendo su titularidad la Comunidad Autónoma.
- d) El título que otorga a una persona el uso y aprovechamiento privativo y temporal de un bien de dominio público, manteniendo su titularidad la Comunidad Autónoma.

84. La duración de las concesiones de dominio público:

- a) Debe ser limitada y no puede ser superior a cincuenta años, excepto en las concesiones relativas al derecho de superficie concedido por la Administración a las cooperativas de vivienda en cesión de uso, en viviendas protegidas o alojamientos dotacionales; en estos casos, el periodo máximo es de noventa y nueve años.
- b) Puede ser ilimitada.
- c) Debe ser limitada y no puede ser superior a setenta y cinco años.

d) Debe ser limitada y no puede ser superior a cuarenta años.

85. El Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas estará constituido por:

- a) La persona titular del Ministerio de Economía y Hacienda y la persona titular de la consejería competente en materia de hacienda de cada comunidad o ciudad autónoma.
- b) La persona titular del Ministerio de Economía y Hacienda, la persona titular del Ministerio de Administraciones Públicas y la persona titular de la consejería competente en materia de hacienda de cada comunidad o ciudad autónoma.
- c) La persona titular del Ministerio de Economía y Hacienda y un representante de cada comunidad autónoma designado por su presidente.
- d) La persona titular del Ministerio de Economía y Hacienda y cinco representantes de otros ministerios designados por la Presidencia del Gobierno.

86. De las siguientes opciones, ¿cuál de ellas no forma parte de los recursos de las comunidades autónomas?:

- a) Los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de derecho privado.
- b) Los tributos cedidos, total o parcialmente, por el Estado.
- c) Los precios públicos estatales.
- d) Las participaciones en los ingresos del Estado a través de los fondos y mecanismos que establezcan las leyes.

87. Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que:

- a) La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización.
- b) Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por los trabajadores específicamente capacitados para ello.
- c) La utilización del equipo de trabajo se lleve a cabo por todos los trabajadores de la empresa.
- d) Son correctas la a) y la b).

88. Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, deberán en particular:

- a) Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas exclusivamente de un experto en prevención de riesgos laborales.
- b) Informar de inmediato al trabajador de mayor antigüedad en la empresa o, si procede, al servicio de prevención acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.
- c) Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad.
- d) Cooperar con el trabajador de mayor antigüedad en la empresa para que este pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.

89. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38.2 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales:

- a) Se constituirá un comité de seguridad y salud en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con cincuenta o más trabajadores.
- b) Se constituirá un comité de seguridad y salud en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con más de cincuenta trabajadores.
- c) Se constituirá un comité de seguridad y salud en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con menos de cincuenta trabajadores.
- d) Se constituirá un comité de seguridad y salud en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con cincuenta o menos trabajadores.

90. El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud:

- a) Priorizando siempre a los trabajadores de mayor edad.
- b) En función de los riesgos inherentes al trabajo.
- c) En función de los recursos de la empresa.
- d) Todas las respuestas anteriores son falsas.

91. Las cartas ciudadanas de servicio son:

- a) Cartas que tienen que publicar los organismos que disponen de este tipo de servicio con indicación de sus especificaciones técnicas.
- b) Cartas de servicio de un proceso o de un servicio que presta más de una administración.
- c) Cartas certificadas o evaluadas por un órgano externo acreditado a este efecto
- d) Cartas que establecen los mínimos de calidad a los que se ajustará un servicio determinado, que pueden surgir de iniciativas previas de cartas marco o individualmente si no forman parte de una red.

92. ¿Cuál de los siguientes criterios, entre otros, debe seguir la evaluación de las políticas públicas?:

- a) Sostenibilidad o permanencia de los cambios o efectos positivos en el tiempo.
- b) Eficacia, en el sentido de si se han conseguido los resultados deseados.
- c) Impacto generado por la aplicación de la política.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

93. La evaluación de las políticas será intermedia:

- a) Cuando se lleve a cabo durante la planificación o la programación de una política pública.
- b) Cuando se lleve a cabo durante la aplicación de la política pública en el periodo programado.
- c) Las respuestas a) y b) son correctas.
- d) Todas las respuestas anteriores son falsas.

94. La sede electrónica es:

- a) Aquella dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad corresponde a una entidad pública empresarial.
- b) Aquella dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad corresponde a los entes del sector público instrumental de las distintas administraciones públicas.

- c) Aquella dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad corresponde a los organismos autónomos.
- d) Aquella dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad corresponde a una administración pública o a uno o varios organismos públicos o entidades de derecho público en el ejercicio de sus competencias.

95. Indica la respuesta correcta en relación con las sedes electrónicas:

- a) Las sedes electrónicas dispondrán de sistemas que permitan el establecimiento de comunicaciones seguras siempre que sean necesarias.
- b) Las sedes electrónicas dispondrán de sistemas que permitan el establecimiento de comunicaciones seguras solo en casos excepcionales.
- c) Las sedes electrónicas dispondrán de sistemas que permitan el establecimiento de comunicaciones seguras siempre que sean necesarias y ello no suponga una alteración sustancial de los presupuestos de cada ente.
- d) Las sedes electrónicas dispondrán de sistemas que permitan el establecimiento de comunicaciones seguras siempre que este requisito se establezca en una disposición con rango de ley.

96. Indica la respuesta incorrecta:

- a) En todos los casos, entre otras, estarán obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las administraciones públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo las personas jurídicas.
- b) En todos los casos, única y exclusivamente estarán obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las administraciones públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo las personas jurídicas.
- c) En todos los casos, entre otras, estarán obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las administraciones públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo las entidades sin personalidad jurídica.
- d) En todos los casos, entre otros, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las administraciones públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración.

97. Indica la respuesta correcta:

- a) Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las administraciones públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las administraciones públicas.
- b) Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las administraciones públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no.
- c) Las personas físicas podrán elegir en algunos casos excepcionales previstos en una disposición con rango de ley si se comunican con las administraciones públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no.
- d) Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las administraciones públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo en casos excepcionales previstos en la normativa específica.

98. De acuerdo con el artículo 16.1 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- a) La Administración General del Estado dispondrá de un registro electrónico general, en el que se hará el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba en cualquier órgano administrativo, organismo público o entidad vinculado o dependiente a estos.
- b) Las administraciones de las comunidades autónomas y la Administración General del Estado dispondrán de un registro electrónico general, en el que se hará el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba en cualquier órgano administrativo, organismo público o entidad vinculado o dependiente a estos.
- c) Cada administración dispondrá de un registro electrónico general, en el que se hará el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba en cualquier órgano administrativo, organismo público o entidad vinculado o dependiente a estos.
- d) La Administración General del Estado y las administraciones locales dispondrán de un registro electrónico general, en el que se hará el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba en cualquier órgano administrativo, organismo público o entidad vinculado o dependiente a estos.

99. De acuerdo con el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las administraciones públicas podrán presentarse en:

- a) Las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.
- b) Las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.
- c) Las oficinas de asistencia en materia de registros, en el registro electrónico de la administración u organismo al que se dirijan, así como en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1 de esta Ley, y en cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

100. Según el artículo 3.2 del Decreto 18/2018, de 22 de junio, por el que se reorganiza, se reestructura y se regula la Agencia de Estrategia Turística de las Illes Balears (AETIB), las finalidades de la AETIB son las siguientes:

- a) La elaboración de la estrategia de sostenibilidad como elemento de merma de los impactos de la actividad turística y de mejora del posicionamiento.
- b) La elaboración de la estrategia turística para la mejora del posicionamiento internacional de las Illes Balears.
- c) La gestión de los fondos europeos que le sea encomendada y, en concreto, la gestión y la tramitación de los NGEU que le sean transferidos con cargo al PRTR.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

101. Según el artículo 1.2 del Decreto 18/2018, de 22 de junio, por el que se reorganiza, se reestructura y se regula la Agencia de Estrategia Turística de las Illes Balears:

- a) La Agencia se integra en el sector público instrumental de la Comunidad Autónoma como una entidad pública empresarial de las definidas en el artículo 2.1.b) de la Ley 7/2010, de 21 de julio, del Sector Público, y su régimen general de organización y funcionamiento está regulado por la Ley, sin perjuicio de otras normas que le puedan ser de aplicación.

- b) La Agencia se integra en el sector público instrumental de la Comunidad Autónoma como un organismo autónomo de los definidos en el artículo 2.1.a) de la Ley 7/2010, de 21 de julio, del Sector Público.
- c) La Agencia se integra en el sector público instrumental de la Comunidad Autónoma como una entidad fundacional de las definidas en el artículo 2.1.c) de la Ley 7/2010, de 21 de julio, del Sector Público.
- d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

102. Según el artículo 6 del Decreto 18/2018, de 22 de junio, por el que se Reorganiza, se Reestructura y se Regula la Agencia de Estrategia Turística de las Illes Balears, son órganos superiores de esta:

- a) La Presidencia y la Vicepresidencia.
- b) La Presidencia, la Vicepresidencia y el Consejo de Dirección.
- c) La Dirección de la Agencia y el adjunto a la Dirección.
- d) La Presidencia y el Consejo de Dirección.

103. Según el artículo 30.11 de la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de Reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, la Comunidad Autónoma tiene la competencia exclusiva en las siguientes materias, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.1 de la Constitución:

- a) Turismo. Ordenación y planificación del sector turístico. Promoción turística. Información turística. Oficinas de promoción turística en el exterior. Regulación y clasificación de las empresas y de los establecimientos turísticos. Regulación de las líneas públicas propias de apoyo y promoción del turismo.
- b) Turismo. Ordenación y planificación del sector turístico.
- c) Ninguna de las anteriores. En materia de turismo, solo los consejos insulares son competentes desde 2022, sin perjuicio de las competencias residuales de los ayuntamientos.
- d) Ninguna de las anteriores. En materia de turismo, solo el Estado tiene competencia exclusiva, sin perjuicio del desarrollo normativo por las comunidades autónomas.

104. Dentro de la clasificación de empresas turísticas del artículo 26 de la Ley 8/2012, de 19 de julio, del Turismo de las Illes Balears, se encuentran:

- a) Empresas constructoras de alojamiento turístico y empresas comercializadoras de estancias turísticas en viviendas.
- b) Empresas constructoras de alojamiento turístico; empresas turístico-residenciales; empresas comercializadoras de estancias turísticas en viviendas y empresas turísticas de restauración.
- c) Solamente las siguientes: empresas turísticas de alojamiento; empresas que tienen por objeto la actividad de intermediación turística y empresas que tienen por objeto las actividades de información, orientación y asistencia turística.
- d) Empresas turísticas de alojamiento; empresas turístico-residenciales; empresas comercializadoras de estancias turísticas en viviendas; empresas turísticas de restauración; empresas que tienen por objeto la actividad de intermediación turística; empresas que tienen por objeto actividades de entretenimiento, recreativas, deportivas, culturales o lúdicas, o todas las que tengan una naturaleza complementaria al sector turístico, y empresas que tienen por objeto las actividades de información, orientación y asistencia turística.

105. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 8/2012, de 19 de julio, del Turismo de las Illes Balears, los municipios de la comunidad autónoma de las Illes Balears, en su ámbito territorial, tienen las siguientes competencias, entre otras, en materia de turismo:

- a) La protección y la conservación de los recursos turísticos, así como la adopción de medidas tendentes a su efectiva utilización y disfrute.
- b) El fomento de la actividad turística en su término municipal.
- c) Las declaraciones de interés turístico municipal.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

106. Según lo dispuesto en el artículo 16.b) de la Ley 8/2012, de 19 de julio, del Turismo de las Illes Balears, a los efectos de esta Ley y sin perjuicio de lo establecido en otra legislación que resulte aplicable, los usuarios de servicios turísticos tienen la obligación de:

- a) Observar las reglas de higiene, educación y convivencia social para la utilización adecuada de los diferentes servicios turísticos.
- b) Observar las reglas de higiene, educación, convivencia social, vestimenta y respeto a las personas, instituciones y costumbres para la utilización adecuada de los diferentes servicios turísticos.
- c) Observar las reglas de higiene, vestimenta y respeto a las personas, instituciones y costumbres para la utilización adecuada de los diferentes servicios turísticos.
- d) Observar las reglas de respeto a las personas, instituciones y costumbres para la utilización adecuada de los diferentes servicios turísticos.

107. Según el artículo 77.1.a) de la Ley 8/2012, de 19 de julio, del Turismo de las Illes Balears, se considera zona turística de reconversión:

- a) Aquel ámbito turístico que presenta una situación de obsolescencia de una pequeña parte de las infraestructuras vinculadas a la actividad turística, que se han degradado o que experimentan desequilibrios estructurales que impiden o dificultan un desarrollo competitivo y sostenible de la industria del sector turístico en la zona.
- b) Aquel ámbito turístico que presenta una situación de obsolescencia de la mayor parte de las infraestructuras vinculadas a la actividad turística, que, aunque no se hayan degradado, pueden llegar a impedir o dificultar en un futuro un desarrollo competitivo y sostenible de la industria del sector turístico en la zona.
- c) Aquel ámbito turístico que presenta una situación de obsolescencia de la mayor parte de las infraestructuras vinculadas a la actividad turística, que se han degradado o que experimentan desequilibrios estructurales que impiden o dificultan un desarrollo competitivo y sostenible de la industria del sector turístico en la zona.
- d) Aquel ámbito turístico que presenta una situación de obsolescencia de la mayor parte de las infraestructuras vinculadas a la actividad turística, que se han degradado o que experimentan desequilibrios estructurales, pero que en ningún caso impiden o dificultan un desarrollo competitivo y sostenible de la industria del sector turístico en la zona.

108. De acuerdo con el artículo 16 del Decreto Ley 1/2020, de 17 de enero, por el Turismo Responsable y la Mejora de la Calidad en Zonas Turísticas:

- a) A las infracciones muy graves les corresponde una sanción de entre 6.001 y 60.000 euros.
- b) A las infracciones muy graves les corresponde una sanción de entre 60.001 y 600.000 euros.

- c) A las infracciones muy graves les corresponde una sanción de entre 60.001 y 800.000 euros.
- d) A las infracciones muy graves les corresponde una sanción de entre 6.000 y 60.001 euros.

109. De acuerdo con el artículo 93.a) de la Ley 8/2012, de 19 de julio, del Turismo de las Illes Balears, se entiende por economía circular:

- a) Un modelo de producción y consumo, fuertemente fundamentado en la optimización de procesos y el rediseño de productos y servicios, que persigue, a través de ciclos biológicos y/o técnicos, mantener el valor funcional de los productos y de los materiales durante el mayor tiempo posible, pero no necesariamente con vocación de minimizar la generación de residuos.
- b) Un modelo excepcional de consumo, a veces fundamentado en la optimización de procesos y el rediseño de productos y servicios, que persigue, a través de ciclos biológicos y/o técnicos, mantener el valor funcional de los productos y de los materiales durante el mayor tiempo posible, con una clara vocación de minimizar tanto la presión sobre los recursos como la generación de residuos.
- c) Un modelo de producción y consumo, fuertemente fundamentado en la optimización de procesos y el rediseño de productos y servicios, que persigue, a través de ciclos biológicos y/o técnicos, mantener el valor funcional de los productos y de los materiales durante el mayor tiempo posible, con una clara vocación de minimizar tanto la presión sobre los recursos como la generación de residuos.
- d) Todas las respuestas anteriores son falsas.

110. Según el artículo 30.3 de la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de Reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, la Comunidad Autónoma tiene la competencia exclusiva en las siguientes materias, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.1 de la Constitución:

- a) Ordenación del territorio, excepto el litoral, el urbanismo y la vivienda.
- b) Ordenación del territorio, incluyendo el litoral, el urbanismo y la vivienda.
- c) Urbanismo, excepto el litoral y la vivienda.
- d) Todas las respuestas anteriores son falsas.